

Medellín, ocho (8) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	DECLARATIVO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Radicado	05 001 31 03 019 2023 00153 02
Demandante	JOSÉ ALEJANDRO TORO RIVERA, LUZ MARINA RIVERA LÓPEZ y PEDRO ALEJANDRO TORO ECHAVARRÍA.
Demandado	JUAN DAVID CHAVARRÍA HENAO, JOSÉ JOAQUÍN CASTELBLANCO TORRES Y ALLIANZ SEGUROS S.A.
Juzgado origen	DIECINUEVE CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta por la parte demandada, frente al auto del 22 de enero de 2024, mediante el cual se resolvió sobre las pruebas solicitadas por las partes.

1. ANTECEDENTES

Como pruebas documentales del daño emergente reclamado, la demandante aportó la factura Nro. JML – 7367 por concepto dictamen de pérdida de capacidad y la cotización del taller para la reparación del vehículo de placa DA084F¹.

En sendos escritos de contestación, los demandados solicitaron la ratificación de dichos documentos² y, mediante la providencia cuestionada, el Juzgado negó la petición con fundamento en el artículo 262 del CGP, considerando que no son de carácter declarativo.

2. EL RECURSO.

Tal decisión fue controvertida solamente por las personas naturales demandadas, quienes argumentaron que los documentos, además de ser dispositivos en cuanto a su relación jurídica propia, son declarativos en tanto contienen una enunciación de hechos y manifestaciones sobre el **valor y criterio de sus productos**, lo que conlleva la posibilidad de citar a su creador para que ratifique sus manifestaciones, por lo que solicitaron revocar la decisión y permitirles el ejercicio de la contradicción.

Mediante auto del 15 de febrero de 2024, la autoridad judicial mantuvo incólume tal decisión, acudiendo para ello a la distinción entre documentos declarativos y dispositivos según nuestro ordenamiento³ y las consideraciones de la Corte Suprema⁴, en el sentido que los primeros son de carácter testimonial, mientras que los segundos corresponden a una relación negocial y, concluyó que el derecho a la contradicción no desborda tales límites legales, pues el ordenamiento procesal prevé un mecanismo de contradicción propio para cada uno de ellos, para los primeros la ratificación y para los segundos el desconocimiento. Por lo que, revisados los documentos objeto de la prueba, insistió en su

¹ Ver archivo 003 páginas 81 y 94.

² El apoderado de Juan David Chavarría Henao y José Joaquín Castelblanco Torres solicitó la ratificación de ambos documentos, el apoderado de Allianz solamente respecto de la cotización de la reparación y otro que no está en controversia.

³ Artículos 262 y 272 CGP.

⁴ CSJ SC, 18 Mar. 2002, Rad. 6649 y SC 5533 de 2017.

calificación y agregó que lo que se pretende discutir es el contenido, más no su autenticidad, razón por la que tampoco se podía entender la solicitud como una tacha. En consecuencia, concedió la alzada en el efecto devolutivo.

3. CONSIDERACIONES

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, encontrándose el presente asunto previsto en el numeral 3.

Para resolver, dispone el artículo 328 que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Determinar si fue acertada la negativa a decretar la ratificación de la factura y la cotización, aportados por la demandante para acreditar el daño emergente que demanda.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Conforme a los artículos 164, 165 y 168 del CGP, toda decisión judicial debe estar respaldada en pruebas, esto es, en todo medio de convicción útil para el convencimiento del juez, debidamente incorporado al proceso, es decir, a través del procedimiento que consagra la misma normatividad.

El estatuto procesal establece las reglas concernientes a la aportación, decreto, práctica y valoración de pruebas, siendo momento determinante aquel en el que el juez decide acerca de su admisibilidad, pues le corresponde determinar cuáles de los medios de convicción solicitados cumplen las cualidades de licitud, pertinencia, conducencia y utilidad.

De ellos se destaca la pertinencia, que consiste en la relación entre la prueba y el objeto del litigio, pues no se justifica incorporar medios de convicción, impedir o dilatar la inclusión de otros cuando no hay discusión respecto de aquello que se pretende probar. Así lo explica la Corte:

“1. En todo asunto judicial, el debate probatorio está necesariamente relacionado con el thema decidendum, esto es, que la carga propositiva y dialéctica que en esa materia incumbe a las partes, así como los deberes y poderes oficiosos que la ley deja en cabeza del juez, deben estar orientados a esclarecer la cuestión respecto de la cual se pide el proveimiento o, dicho de mejor forma, el esfuerzo allí realizado se endereza a verificar los enunciados fácticos traídos en la demanda y en su respectiva réplica, para establecer si hay lugar a surtir las consecuencias de las normas jurídicas cuyo efecto se persigue.

Ello explica porque el juez debe hacer un análisis de pertinencia, dirigido a excluir del debate aquellas pruebas que tienen que ver con hechos ajenos a la problemática planteada, en tanto que acceder a decretarlas y practicarlas a pesar de su irrelevancia, no sólo representaría un desgaste innecesario en la función judicial, sino que además implicaría la demora injustificada de un trámite, en perjuicio de los principios de economía, celeridad, eficiencia y eficacia que gobiernan la administración de justicia.”⁵

Los artículos 262⁶ y 272⁷ del CGP regulan dos clases de documentos emanados de terceros, los declarativos y los dispositivos, estableciendo que la contradicción de los primeros se efectúa mediante la solicitud de ratificación, mientras que la de los segundos se realiza mediante su desconocimiento fundado.

La Corte, pese a reconocer que hacen parte de la misma clase declarativa, ha diferenciado las dos clases de documentos:

“Con este específico propósito, ya ha precisado la Sala: “sabido es que los documentos ... son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter testimonial (los segundos)” (CCXXII, pág. 560).”⁸

Doctrinalmente, se sostiene que el derecho a la prueba es el derecho al testigo, esto es, que la tarea demostrativa, vista desde una perspectiva amplia, necesariamente involucra al sujeto que interviene en su producción, en tal sentido todos los medios de prueba derivan del concepto amplio del derecho al testigo:

“El testigo, en el sentido amplio del término, es el medio de prueba por excelencia si se tiene en cuenta que el conocimiento es una producción de las personas; por tanto, la ciencia, la técnica, la evidencia física o los documentos son creados, descubiertos o contextualizados por los sujetos que tienen relación con los mismos. El testimonio en sentido amplio puede ser de parte, de tercero, de experto, de acreditación de elementos materiales o de autenticidad del documento.

No se busca pregonar que exista indiferenciación entre las diversas fuentes del conocimiento, sino de asumir que existe una plantilla básica para el conocimiento judicial y esta se constituye por el testimonio en sentido amplio. En efecto, el conocimiento no puede

⁵ Auto del 27 de mayo de 2010, Exp. No. 11001-02-03-000-2008-01760-00, MP Edgardo Villamil Portilla.

⁶ “ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.”

⁷ “ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros. ...”

⁸ CSJ SC, 18 Mar. 2002, citada por el a quo.

reducirse a un conjunto de proposiciones conectadas lógicamente entre sí, ni tampoco es solo las descripciones de las observaciones sensoriales, sino que en ese conocimiento también inciden las perspectivas o los paradigmas del sujeto cognoscente.⁹ Por consiguiente, en la producción del conocimiento o la información no es posible prescindir del sujeto cognoscente; todo conocimiento envuelve en alguna medida las opiniones, las inferencias, las conclusiones, las contextualizaciones del sujeto cognoscente. De esta manera, en el campo judicial, los documentos, los elementos materiales, las sensaciones mismas son llevados a los procesos judiciales por personas, y son éstas quienes los contextualizan, las que los conectan con los hechos; por tanto, es una falacia ontologista considerar que el documento o el dictamen del perito por sí solos son la prueba independiente de las inferencias, opiniones o paradigmas de los que parten las personas que los crean o descubren.”¹⁰

Conforme a lo expuesto, se puede afirmar que los documentos privados emanados de terceros pueden ser netamente de contenido declarativo o dispositivo y, en esa medida, su contradicción debe efectuarse conforme a las reglas que regulan cada una de tales modalidades. Pero ello no obsta que un documento de tal origen pueda comprender los dos tipos de contenidos, esto es, que sea dispositivo, en la medida de su componente negocial, pero simultáneamente sea declarativo, en tanto trascienda tales aristas para dar cuenta de una circunstancia de ciencia o conocimiento sobre determinados hechos. Tal sería el caso de una factura que, además de comprender los requisitos formales y sustanciales de título valor¹¹, dé cuenta del precio de un determinado bien o servicio en un sitio y momento precisos y, en ese sentido, no solamente estaría acreditando la realización de un contrato, sino el valor de mercado de ese bien o servicio para la época y contexto precisos y; en similar sentido, una cotización puede superar el ámbito propio de la propuesta u oferta¹², para demostrar el precio de los bienes y servicios ofrecidos en la época de su formulación.

Todo lo anterior, en el marco del principio de **pertinencia** que rige el juicio de admisibilidad probatoria, de tal forma que no hay lugar a prueba de aspectos que no tengan relevancia para la controversia suscitada.

3.4 CASO CONCRETO.

En este caso se aprecia que la actora afirmó en la demanda haber sufrido perjuicio patrimonial, entre otras razones, por los daños a la motocicleta y el pago del dictamen de pérdida de capacidad laboral¹³ y, que frente a ello el apoderado de los apelantes contestó:

⁹ Vázquez (2014: 20-22) lo explica en el caso de la prueba pericial: expertise y experto son nociones íntimamente relacionadas, desde Thayer se ha dicho que en algún sentido «todo testimonio sobre una cuestión de hecho es opinion evidence; i.e., una conclusión formada a partir de un fenómeno y las impresiones mentales».

¹⁰ Luis Bernardo Ruiz Jaramillo, El derecho constitucional a la prueba y su configuración en el Código General del Proceso Colombiano, pág. 113.

¹¹ Artículo 772 y siguientes Código de Comercio.

¹² Artículo 845 y siguientes Código de Comercio.

¹³ Ver archivo 005 página 19.

“NO SE ADMITE, la manifestación que indica que el señor Pedro Alejandro incurrió en gastos patrimoniales en razón al arreglo y parqueadero, grúa y transporte de la moto, no existe prueba fidedigna en el expediente que permita corroborar lo afirmado en este hecho.”

Apréciase que la parte apelante no se opuso expresamente a los gastos por concepto de dictamen de la pérdida de capacidad laboral, luego es evidente que en tal aspecto no se consolidó una controversia que justifique o sustente la ratificación invocada¹⁴, pues si no reparó el valor de la factura, no tiene sentido convocar a quien aparece firmándola para indagarla al respecto.

En el mismo sentido, obsérvese como frente al reclamo por daños materiales (cotización), la demandada apelante no discutió sus valores ni criterios, sino que se limitó a manifestar que no los admitía y que no había prueba de ellos, pero no controvertió los conceptos ni la cuantificación enunciada por la actora, luego tampoco se aprecia que la defensa propuesta se hubiere dirigido a discutir el **valor y criterio** de lo pretendido, de tal forma que la decisión adoptada por el a quo fue acertada, en la medida que no había lugar a decretar una ratificación documental por aspectos que no fueron objeto de controversia, es decir, la prueba pedida carecía de pertinencia.

En línea con lo expuesto, es posible que un documento privado emanado de un tercero se pueda catalogar como dispositivo en virtud de su contenido negocial y, por tanto, que su contradicción deba realizarse, en principio, por la vía del desconocimiento (artículo 272 CGP); sin embargo, también es factible que ese mismo documento contenga una manifestación de ciencia o conocimiento sobre determinados hechos conocidos por ese tercero, como serían el valor y criterio de ciertos bienes y servicios en un momento y lugar de terminados, siendo entonces procedente la contradicción del mismo por la vía de la ratificación (artículo 262 CGP). Pero, ello no significa que la contradicción de ese documento se pueda intentar indistintamente por una u otra vía, será la **pertinencia del debate** suscitado la que determinará el conducto a través del cual se pueda discutir el contenido por su naturaleza declarativa o dispositiva.

En este caso, la parte impugnante no criticó la eventual faceta declarativa de los documentos referidos, factura y cotización que, por su encabezado y contenido, evidentemente, corresponden a aquellos de naturaleza dispositiva. Su postura y conducta procesal se limitó a negar el hecho en el que la actora afirmó que incurrió en unos gastos que reclama como daño emergente, no criticó el valor, ni el criterio al que corresponden los servicios que en dichos documentos se refieren y, en esa medida, su solicitud de ratificación resultaba improcedente por ausencia de pertinencia, pues no se planteó discusión al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

¹⁴ El numeral 3 del artículo 96 del CGP impone al demandado expresar en la contestación de la demanda los fundamentos fácticos de sus excepciones.

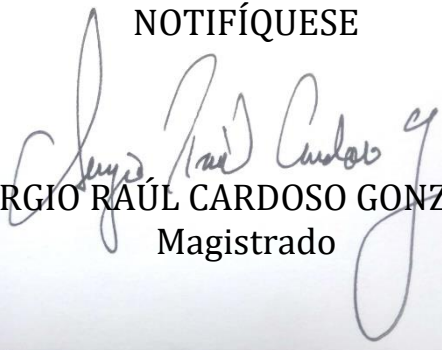
4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 22 de enero de 2024 en lo que fue objeto de apelación.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para que disponga lo correspondiente, conforme al artículo 329 del CGP.

TERCERO: No condenar en costas.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado